

UNA REPUBLICA PARA LA CRISIS (1931-1936)

FERNANDO GARCIA DE CORTAZAR

Catedrático de Historia Contemporánea
Universidad de Deusto

LOS primeros treinta años del siglo XX bien pueden ser recordados en Europa como una gran oportunidad perdida para alcanzar una sociedad más justa y racional por vías pacíficas. Una vez firmada la paz de Versalles, los cambios estructurales y sociales sobrevenidos en los países europeos y en el imperio ruso en lugar de hacer reflexionar a las clases gobernantes sobre la necesidad de reformas profundas provocaron actitudes defensivas y belicistas que impedirían progresar por otros caminos que no fueran los de nuevas guerras.

Entre el mundo optimista y confiado que cruzaría el siglo y el encono de la depresión tan sólo un escaso decenio de progreso económico pareció aliviar las viejas aspiraciones humanas de bienestar y prosperidad. Pero pronto la bisagra de 1929 iba a crujir de forma brutal sobre aquella generación. Si algo le faltaba a la novel y bien intencionada Sociedad de Naciones para resultar aún más inoperante era la incontestable realidad de una crisis económica y social como no se recordaba en ningún otro período de la historia contemporánea. Su impotencia para oponerse al rearme e impedir los conflictos sería el mejor símbolo de la frustración política de la época.

En España, los años de la Dictadura sólo habían servido para estancar más aún las torrenciales aguas de la sociedad española, cuyos factores de discordia no hacían sino madurar desde comienzo de siglo. Lo que se debatía en el fondo de las agitaciones sociales y las convulsiones políticas era la crisis del alumbramiento de una nueva sociedad, en la que la burguesía pugnaba por imponer el modelo ya imperante en el resto europeo. Frenada, sin embargo, por los mismos que desde 1868 venían abortando el espíritu revolucionario y rodeada por la cada vez mayor pujanza del joven movimiento obrero, la cauta burguesía fue desertando de su quehacer histórico para dejar

el campo libre a la contienda entre pasado y futuro.

La crisis mundial de 1929 vino a coincidir en la cresta de la ola con un conjunto de inaplazables urgencias sociales que habrían de llevar a España a la modernidad. Pero su conjunción tuvo el efecto histórico contrario abriendo el camino del caos. Debilitada España por movimientos nacionalistas, dependiendo en su evolución económica de un entorno ya desarrollado y atravesada por profundas fallas sociales, con un campesinado irredento y una clase obrera revolucionaria... sólo un minoritario grupo de intelectuales y políticos se atrevió con la cita histórica de la crisis. Ellos intentaron el sueño republicano de 1931.

Dueños de la idea y la palabra

Como una esperanza de primavera la República española llegaba en abril de 1931 y cinco años más tarde se despedía envuelta en el horror de la guerra civil. *Con las primeras hojas de los chopos y las últimas de los almendros, la primavera traía a nuestra República de la mano* había escrito Machado cantando la esperanza ciudadana. En un ambiente económico tenso y entre desatadas emociones políticas se habían convocado elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. La campaña electoral estuvo presidida por la vehemencia de los mítines y por una agitación social sin precedentes. Las urnas dieron el triunfo a los candidatos republicanos en los grandes núcleos urbanos, donde la libertad del voto es real y se precisa mayor número de votos, a pesar del aplastante dominio monárquico del campo.

Convencido de que las elecciones habían sido un plebiscito nacional contra la monarquía, el conde de Romanones aconsejó al rey abandonar España y negoció con el Comité Revolucionario el traspaso del gobierno. Cuando Sanjurjo, director general de la Guardia Civil, manifestó que no garantizaría más la vida del régimen, Alfonso XIII se apresuró a marchar. Vestida de fiesta, el 14 de abril, España proclama la República y un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora con representantes de los partidos republicanos y el socialista, asume pacíficamente el poder.

Exaltación, nerviosismo e incredulidad engalanan las calles en las dos semanas siguientes. El monarca desde su observatorio en el extranjero aconseja a sus fieles aceptar los acontecimientos. Atento a la oportunidad que se le brinda, el anarquismo acata la República, aunque la considera burguesa. La Iglesia jerárquica, cau-

telosa, pide prudencia y respeto para con las autoridades constituidas; a pesar del fuerte contenido antiliberal del catolicismo español, muchos creyentes juzgaron en aquel abril que se podía dar un voto de confianza a un régimen que prometía acabar con los abusos y corruptelas de la política monárquica.

La idea de que era necesario cambiar parecía aceptada por todos los españoles. Pero ¿qué?, la República iba a responder al momento. Antes y acorde con una tradición secular, un centenar de edificios eclesiásticos ardía en la pira del anticlericalismo de quienes pensaban que el verdadero problema español era el poder de la Iglesia. Sin embargo, aquellas hogueras anónimas, nunca reivindicadas, producirían mayor daño a la República que a los propios curas.

Si la Dictadura había gobernado sin reformar, los republicanos quisieron innovar pero gobernaron dificultosamente. El nuevo régimen estaba llamado en apariencia a enterrar la vieja España cacique de la Restauración. Se esperaba de él un verdadero revolcón social con la palanca de la reforma agraria y el protagonismo del movimiento obrero; un correctivo a la omnipresencia de la Iglesia; un reajuste de los cuerpos armados, que a un tiempo podase los recargados cuadros de oficiales y ahuyentase el espectro del militarismo; una labor cultural y de educación ciudadana para hacer realidad las fórmulas democráticas y, finalmente, una respuesta política a la singularidad regional de la península. Otras naciones europeas occidentales habían logrado tales metas de modo progresivo y a lo largo de mucho tiempo; el sueño de 1931 consistía en cambiar todas esas cosas a la vez y en pocos años.

Manos a la obra y a impulsos de republicanos y socialistas, el gobierno pretende cambiar el rumbo de la historia de España y transformar el Estado en un sentido moderno, laico y democrático. "Rectificar lo tradicional por lo racional" fue como un compendio del ideario político de Manuel Azaña, un intelectual burgués convertido, desde la jefatura del gabinete, en paradigma del espíritu republicano. Más tarde, ya presidente de la República, su estrella se iría apagando hasta extinguirse por completo en el derrotismo y el miedo del trienio de guerra civil. Tanto él como sus seguidores temían a la clase obrera revolucionaria y nunca se recuperaron de la sacudida producida por los desmanes sangrientos de los proletarios en los primeros meses de la contienda.

La República no inventó el anticlericalismo ni el problema religioso pero tuvo que vérselas

con ellos. Inspirada en el modelo francés, la nueva legalidad exigió la disolución de aquellas órdenes religiosas consideradas un peligro para el Estado y el fin del presupuesto del clero, todo ello en el escenario de la separación entre el Estado y la Iglesia. Proclamada la libertad de fe, España no profesaría creencia oficial alguna. Las discusiones dividen la cámara y la calle mientras el *confesionalismo* militante de laicistas y católicos amenaza la vida de la República el anticlericalismo, extendido desde los sillones oficiales, cristaliza en el decreto de 1932 que disuelve la Compañía de Jesús y en la Ley de Congregaciones Religiosas que, al año siguiente, limita el ejercicio del culto católico, establece normas secularizadoras de bienes eclesiásticos y expulsa de la docencia a los regulares.

Con el convencimiento de que el atraso español podría superarse mediante un buen sistema educativo, el gobierno azañista culpabiliza a los métodos y profesores religiosos y se lanza a sustituirlos por partidarios de una enseñanza progresista. La contienda laico-religiosa toma como plataforma la política educativa y el azañismo proyecta una ambiciosa estatalización de la enseñanza en su empeño de liquidar la impronta social de la Iglesia. No obstante la resuelta voluntad de la República, ni el tiempo ni el dinero permitieron aniquilar el monopolio educativo de la Iglesia, que, paradójicamente, habría de desplomarse treinta años más tarde a impulsos del desarrollo económico promovido por los tecnócratas del Opus Dei.

A la vez que pretende dar un vuelco a la enseñanza, la República aborda la espinosa tarea de reformar el ejército, sospechoso de devoción a la monarquía. La recién estrenada clase política ve al militar como una agresión y lo arrincona social e ideológicamente en un intento por desposeerlo de su potencia inmediata. Para aligerar la abultada cúpula castrense, Azaña ofreció a los oficiales la posibilidad de acogerse a la jubilación y retirarse a la vida civil con el sueldo íntegro. Muchos eligieron esta ventajosa reconversión, que redujo drásticamente el número de oficiales pero que no logró republicanizar la milicia. Otras medidas pretendieron disminuir la amplitud de la jurisdicción militar en beneficio de la civil por lo que se acusó a Azaña de querer triturar el Ejército. Temida por su fuerza, la República no se atrevió a desafiar a la derecha y disolver la Guardia Civil; prefirió crear, frente a ella, una Guardia de Asalto, fuerza escogida y leal.

Tambaleante, al que las reformas no logran sino maquillar, con los pecados de la Restauración y apenas preparado para un combate

efectivo, el ejército verá en Azaña el origen de sus males y su desprestigio. Según idea de éste, la configuración de una fuerza de choque era absurda, dada la nula política exterior de su gobierno; la República secundó la Sociedad de Naciones, pero eludió todo compromiso internacional. A la espera de tiempos mejores, los militares "africanistas", único cuerpo de lucha, soportan con disgusto los envites de la República. Convencidos de su condición de salvadores de la patria, revestidos del antiguo orgullo castrense, estos oficiales aguardan el momento oportuno de reconducir a España en su *destino histórico*.

La puesta en escena de una nueva política laboral por el ministerio socialista de Francisco Largo Caballero ocupó una buena parte del primer bienio republicano, traducido en desagrado empresarial y esperanzas de mejora entre los trabajadores. El instrumento más importante y discutido de intervención laboral fueron los *jurados mixtos* de obreros y patronos, dotados de amplia autoridad en materia de trabajo. Gracias a la carta blanca que la UGT concede al ministro, desciende el nivel de la conflictividad crónica en este sector pues el sindicato socialista busca el entendimiento con la patronal y su afianzamiento como interlocutor válido, frente al radicalismo de comunistas o anarquistas. La mayor urgencia social del bienio azañista, no obstante, radicó en la *reforma agraria*. Miles de jornaleros extremeños y andaluces vivían de trabajos estacionales, mal remunerados, y en precarias condiciones en los extensos latifundios de la aristocracia absentista.

En la esperanza de muchos, la República debía ser el régimen que resolviera de una vez por todas las lacras seculares del campo español, imponiendo una más justa propiedad y haciéndola más productiva. Para ello era fundamental aprobar una ley que expropiara fincas y las repartiera entre campesinos sin tierras. Fortalecido por el descalabro del pronunciamiento derechista de Sanjurjo, Manuel Azaña saca adelante la Ley de Bases de la Reforma Agraria, aplicable tan sólo en 14 provincias, que autoriza la expropiación con indemnización según un sistema bastante complejo y prevé, en teoría, formas colectivas e individuales de laboreo de la tierra. La lentitud burocrática, los altos costos de la expropiación y los bajos presupuestos apenas van a permitir asentar a doce mil campesinos.

La efímera aventura que trajo más ruido que nueces se frena con los aires poco radicales de los gobiernos de Alejandro Lerroux. Unidos los intereses de la oligarquía terrateniente al

temor de la cúpula financiera, se aborta el nacimiento de un banco especial para gestionar los créditos agrarios. Diferencias políticas, un Instituto de Reforma con las manos atadas, conflictos sociales y altercados de la Guardia Civil con el campesinado dieron al traste con los sueños transformadores y, enseguida, con la República, asediada por labradores desengañados y prestos a cualquier movimiento insurreccional.

Partidarios de la acción directa y la revolución social, los sindicatos anarquistas entienden que no pueden conseguir sus aspiraciones respetando la legalidad de una República burguesa, por lo que desencadenan en repetidas ocasiones huelgas revolucionarias. En Cataluña proclaman el comunismo libertario, pero la algarada es dominada por el ejército sin derramamiento de sangre. No ocurre lo mismo en el pueblo andaluz de Casas Viejas, donde braceros cenetistas atacan el cuartel de la Guardia Civil y hacen necesaria la intervención de los guardias de asalto que logran aplastar el levantamiento, después de matar a sangre fría a una docena larga de campesinos. La tragedia causa estupor en la opinión pública, avivado por una de las desgraciadas frases de Azaña, mientras la derecha le culpa de lo sucedido e intenta derribarle en el parlamento. A su vez la izquierda proletaria se aparta cada vez más de una República, definida constitucionalmente como "de trabajadores de toda clase", cuyas fuerzas del orden reprimen de tal suerte a labradores hambrientos.

Deprisa, deprisa

Por la Constitución aprobada a finales de 1931, España se convertía en un Estado republicano, democrático, laico, descentralizado, con cámara única, sufragio universal y Tribunal de Garantías, al cuidado de la pureza constitucional. Abierto el cauce para resolver los problemas regionales, los catalanes se abalanzan a la carrera del reconocimiento de su originalidad histórica, redactando un proyecto de Estatuto, que es abrumadoramente plebiscitado en Cataluña y presentado al gobierno. Las cosas no fueron tan fáciles en el Congreso de Diputados pues las arremetidas de la derecha y el centro agigantan la onda emotiva que recorre España y pone en pie a miles de cruzados contra ese *desgarrón* de la patria. En defensa de la autonomía catalana, Azaña pronunció uno de sus más brillantes discursos y arriesgó la vida de su gobierno y su prestigio personal con la aprobación del Estatuto. El intelectual madrileño

tocaba el cielo de su carrera política en septiembre de 1932; era el jefe de un gobierno que levantaba escuelas, sujetaba a los militares y ligaba Cataluña, con su flamante *Generalitat*, a la República democrática.

En el País Vasco el panorama político ofrecía rasgos bien distintos: unanimidad y fervor autonomista sólo podrían encontrarse en las filas del nacionalismo vasco heredero de Sabino Arana. Para los socialistas y republicanos, la demanda estatutaria era un asunto menor, siempre supeditada a la consolidación de la República. La derecha vasca no quería ni oír hablar de ella aunque la utilizó en algún momento con ánimo de sabotear el régimen. Así pues, el Estatuto nacía con un pecado de origen: no respondía más que a los propósitos autonomistas de un sector del País Vasco. Era hijo de un espíritu defensivo que acababa de contemplar cómo la República había quemado iglesias y que veía en una autonomía amplia la mejor salvaguarda del catolicismo y las tradiciones vascas. Con semejantes credenciales, la autonomía vasca estaba predestinada a sufrir una larga agonía parlamentaria hasta su resurrección en la España en guerra, cuando el gobierno de Largo Caballero reclame el esfuerzo de los nacionalistas vascos en la defensa de Vizcaya.

Debido a su enorme capacidad destructora, la crisis americana del año 29 alteró seriamente los presupuestos ideológicos de los grupos patronales y, por tanto, de la burguesía. Los países que, como España, no habían estado en la mesa principal del festín y se habían quedado en la periferia del desarrollo tardaron algo más en acusar el golpe. Su reducido grado de integración les evitó la primera embestida, pero no las posteriores. Si en la bonanza económica los países industriales dominaban y hacían dependientes al resto, en el ciclo depresivo era inevitable que esta dependencia no canalizara también los peores efectos de la crisis.

Los vínculos de España con los países europeos estaban señalados por la exportación de materias primas minerales y excedentes agrícolas: cereales, aceite, agrios, plátanos, vino..., es decir, "mesa y postre". De la buena coyuntura de las mesas europeas dependía en gran parte las entradas de oro y divisas, con las que poder pagar las importaciones. La depresión económica que golpeó en especial a las clases medias, los mejores clientes de los productos españoles, se tradujo en una brutal caída de las exportaciones. Inglaterra, el principal demandante, cerró filas en su imperio y en las naciones bajo su influencia, lo que fue

decisivo en la dramática bajada de 76 puntos del índice exportador español, con su correspondencia lógica en una parecida caída de la nómina importadora, que retrasa el avance en la mecanización del país. La contención de los intercambios fue además apoyada, y aun acelerada, por restricciones abundantes en la legislación comercial. Las flotas mercantes de todo el mundo acusaron la coyuntura y los fletes, lo mismo regulares que discrecionales, descendieron notablemente. También las navieras españolas que habían alcanzado un importante grado de prosperidad sintieron reducirse su movimiento hasta límites insostenibles.

Congelados o retirados numerosos encargos de los astilleros, su inactividad se transmitió a las fábricas siderúrgicas que les suministraban habitualmente la chapa de acero para buques; y como consecuencia el carbón y el mineral de hierro dejaron de ser demandados a la minería. Todo un encadenado mundo económico se vio afectado por la depresión. Muchas empresas e industrias auxiliares no pudieron atender sus obligaciones financieras, arrastrando a algunos bancos en su caída. Uno de los que tuvo que cerrar sería el Banco de Cataluña mientras que el resto, incluidos los de mayor capacidad financiera, aunque resistieron mejor la crisis, pasaron por momentos de estrechez en sus negocios y descendieron sus beneficios.

Sin embargo, la producción agrícola española presentó un marcado contraste con los sectores industriales en quiebra. Los primeros cinco años de la década fueron de importante progresión alcanzándose en 1934 una cosecha récord en trigo y muy buenos resultados en otras especialidades: cebada, centeno, patata... La fibra de algodón llegaría, de igual manera, en 1935 a recoger su mayor producción conocida. Pero los productos de exportación tradicionales, afectados por la contracción del mercado europeo, verían caer sus índices de producción de forma alarmante.

El pánico financiero del cambio de régimen apenas si amainó durante el ejercicio republicano, que hubo de aguantar la evasión de capitales, la repatriación de inversiones extranjeras y los trastornos de una peseta devaluada. Víctima de la crisis, el flujo financiero americano que había beneficiado a Europa desde 1918 desmantelaba las economías nacionales del viejo continente. La situación de las finanzas en el momento de acceder al poder la conjunción republicano-socialista estaba fuertemente gravada por los planes de obras públicas de la Dictadura. Importantes deudas internas, como los trescientos millones que la industria de la

construcción reclamaba al Estado, o externas, como el empréstito de doce millones y medio de libras suscrito por Calvo Sotelo, fueron un punto de partida negativo para el ministro de Hacienda, Indalecio Prieto.

Con tales servidumbres, la República seguiría una cauta política hacendística, prescindiendo del sistema de presupuestos extraordinarios, y endeudándose mucho menos que en el período anterior. Sólo emitiría del orden de dos mil millones de Deuda, frente a los ocho mil del régimen dictatorial. Esta estrategia financiera no habría de gustar ni a la gran industria ni a la banca, acostumbrada al provechoso modelo de la Dictadura que había propiciado unos años de excelentes beneficios a través de la demanda agregada y de la emisión de bonos estatales. Además de esto, el sucesor de Prieto en Hacienda, Jaime Carner, llevaría a cabo una reforma fiscal atrevida al implantar el sistema de contribución directa, ya existente en Europa, que, aunque no rindiera todo lo que se esperaba, contribuyó también a mejorar la posición financiera del Estado. El aumento de la presión fiscal fue importante entre 1930 y 1933, en que se elevó su participación en el total de la renta nacional de un 15,6 a un 20,7 por 100.

El pasado continúa

Todas las medidas adoptadas por la República resultaron ineficaces ante el poder demoleedor de la crisis económica: nunca el paro obrero había alcanzado la cota de los 650.000 desempleados. Se hundía el liberalismo económico y arrastraba en su derrumbe, en el ánimo de la burguesía, a todo liberalismo, que, en otro plano, se mostraba incapaz de defenderle de la escalada del comunismo. De esta forma se extenderían con comodidad las fórmulas *superadoras* del liberalismo y el comunismo, las soluciones corporativas, nacional-socialistas y fascistas, que pronto seducen a la burguesía.

Mientras el gobierno republicano-socialista se desgasta, la derecha legal, inspirada por Angel Herrera, hace de *Acción Popular* un poderoso movimiento de masas de muy diversa procedencia social, cuya meta radica en la creación de "una gran nación profundamente cristiana". Del conglomerado nace en 1933 la *Confederación Española de Derechas Autónomas* (CEDA), bajo el liderazgo indiscutido del catedrático José María Gil Robles, a la par que el grupo monárquico encabezado por Goicoechea constituye *Renovación Española*. El ascenso de la derecha parece incontenible. En vísperas de las elecciones generales de

noviembre de ese año, José Antonio Primo de Rivera funda *Falange Española*, contraria al liberalismo y al marxismo, declaradamente anti-republicana y empapada de un violento nacionalismo españolista.

Con una abstención mayor que 1931, los españoles —incluidas, por vez primera, las mujeres— acuden a las urnas cuando la crisis económica alcanza su punto álgido. El revuelo social, la penuria, el desencanto del reformismo azañista y la desmembración de las izquierdas, que se presentan por separado, dan un giro al rumbo de la República. La derecha triunfa —115 escaños para la CEDA— y el centro con el Partido Radical —102— se fortalece. El presidente Alcalá Zamora llama a Lerroux a formar gobierno al considerar que Gil Robles no había aceptado el régimen republicano.

Paralizadas las reformas azañistas, Madrid arremete contra el parlamento catalán, por una ley encaminada a convertir a los colonos en propietarios, y enfurece a los vascos con un intento de manipulación de su concierto económico, a la vez que amnistia a los protagonistas de la *sanjurjada*. El descontento en la calle degenera en acción violenta: la CNT declara la huelga general en Zaragoza y luego unida a UGT vuelve a poner en jaque al gobierno con nuevas movilizaciones en el campo. Pero más grave aún que las luchas callejeras es la radicalización de los dirigentes y militantes del PSOE y UGT, dirigidos ambos por Largo Caballero, cuyo disgusto se acrecienta al compás del bascular derechista de la República y de la actitud de revancha de muchos patronos.

El ascenso del nazismo en Alemania y el aplastamiento de los socialistas en Austria aumentan los temores. En las continuas manifestaciones autoritarias y antiparlamentarias de algunos dirigentes de la CEDA, los socialistas creen ver una amenaza fascista, análoga a la austriaca. Y así desde la primavera de 1934, la directiva del PSOE se manifiesta más resuelta a tomar el poder por la fuerza, rompiendo la legalidad republicana, y a reemplazar la política moderada practicada hasta entonces por otra abiertamente revolucionaria. El primero de octubre, la CEDA retira su apoyo a Samper y Gil Robles exige participar en el gobierno, colocando tres ministros en el gabinete de Lerroux; las ejecutivas socialista y ugetista no esperan más y cursan a toda España la orden de huelga general revolucionaria, que es secundada con distinto ímpetu según los lugares.

En Cataluña, el sucesor de Maciá en la Generalitat, Lluís Companys, rompe con el gobierno central y proclama el Estado catalán dentro de

la República federal española pero las tropas del general Batet sofocan la rebelión con un balance de 46 muertos y la suspensión de la autonomía. El único lugar donde los trabajadores estaban preparados para la lucha era Asturias y hacia allí se dirigieron todas las miradas en aquel octubre revolucionario. Las organizaciones proletarias, unificadas en la Alianza Obrera y hechas de una mística solidaria, asaltan las casas-cuartel de la guardia civil, toman la cuenca minera, ocupan las fábricas de armas y se apoderan de Oviedo. En diversas localidades los sublevados constituyen comunas obreras, repúblicas utópicas, en las que se decretó el comunismo y funcionó una administración rudimentaria. Desde Madrid el general Franco dirige las operaciones militares para aplastar la insurrección al tiempo que en Asturias el ejército *africano* sofoca en sangre la revuelta de los obreros.

Frenado el movimiento revolucionario más amplio de la historia de España, las represalias se extienden a todo el país. Ingresan en las cárceles 30.000 personas, se limitan las actividades de los partidos obreros y se establece la censura previa. Si la brutalidad de los sublevados había enconado los ánimos de la derecha, la represión gubernamental provocará un efecto similar a la izquierda; la brecha es tan honda que los moderados, de uno y otro lado, se encuentran rebasados y la sociedad española se aleja del camino de la reconciliación.

Con el fantasma de una inminente revolución marxista, la extrema derecha fustiga a la CEDA, acusándole de tibia, mientras Calvo Sotelo, que se había exiliado al proclamarse la República, regresa para hacerse cargo del *Bloque Nacional* con un programa totalitario. La Falange de José Antonio, violenta pero escasa, comienza a recibir ayuda económica de los fascistas italianos. En contrapartida, Largo Caballero radicaliza su bastión obrero de la UGT, llevado por sus simpatías comunistas y por una especie de izquierdismo infantil, del que se encontraba conveciente en vísperas de la guerra civil.

Ante la escalada de los fascismos, el comunismo internacional modifica su estrategia: la alternativa ya no se presenta como hasta entonces entre dictadura del proletariado y democracia burguesa, sino entre fascismo y democracia. Por ello, la política a seguir pasaría por el establecimiento de Frentes Populares, que suponían la alianza del proletariado con las clases medias, de los socialistas y comunistas con los burgueses antifascistas frente al enemigo común. En España, el experimento pudo en-

seguida ponerse en práctica pues el deterioro institucional, al verse salpicados en escándalos financieros diversos políticos, provocaría la convocatoria de elecciones para febrero de 1936. La antigua conjunción republicano-socialista había asimilado su experiencia de derrota y oposición, constituyendo un arrollador *Frente Popular*, integrado por las izquierdas y gran parte de las fuerzas progresistas y en el que no faltaban representaciones anarcosindicalistas. Con un programa que incluía la amnistía de los presos políticos y represaliados de octubre y el restablecimiento de la legislación del primer bienio, el Frente Popular conquista el poder.

A pesar de la buena voluntad de Azaña, la República no consigue recuperar el pulso, astixiada por el radicalismo proletario y la degradación del orden público. Agricultores hambrientos invaden tierras en Salamanca, Extremadura y Andalucía. Arden de nuevo los conventos mientras la Iglesia acurrucada en sus sacristías, no disimula su deseo de que termine la pesadilla de la República. La Falange, de día en día más multiplicada, se especializa en la violencia callejera, convirtiéndose en un verdadero peligro para el Frente Popular; de ahí que Azaña actuara contra ella con especial

rigor. Un teniente de la guardia de asalto es asesinado; al día siguiente cae José Calvo Sotelo, líder de la derecha parlamentaria, muerto por un grupo de agentes del orden. Los ánimos calientes desde hace tiempo convencen a los generales levantiscos de que ha llegado el tan esperado momento.

Fue un error destinar a Mola a Pamplona, donde se ganó al *requeté*, el brazo armado del carlismo, y se erigió en *director* de la conjura, también Franco y Godea, en sus destinos insulares, habían maquinado a sus anchas hasta descubrir la ocasión. El 17 de julio de 1936 la guarnición de Melilla se subleva y declara el estado de guerra en Marruecos, disparándose el mecanismo que iba a llevar a España a su más brutal enfrentamiento. Desde Canarias, Francisco Franco vuela a Tetuán para hacerse con las riendas del combativo ejército *alricano* y el levantamiento se consolida ante la inquietud y expectación de un gobierno indeciso. Imaginado por Mola como un hachazo simultáneo en todas las comandancias, el *alzamiento nacional*, combinando los sables con las pretensiones monárquicas, los sueños tradicionalistas y el ímpetu falangista, desbarataba una República fracasada a la que Azaña no había sabido reconducir.